T Sala IX

Fecha de emisión de notificación: 13/junio/2025

Sr/a: VERONICA CECILIA QUINTEROS

Domicilio: 27230668855

Tipo de domicilio

Electrónico

Carácter: Sin Asignación

Observaciones especiales: Sin Asignación

Copias: N

Tribunal: CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA IX - sito en Diagonal Roque Sáenz Peña N° 1198

Hago saber a Ud- que en el Expte Nro. 43226 / 2024 caratulado: ASOCIACION BANCARIA Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL PODER EJECUTIVO MINISTERIO DE SEGURIDAD s/JUICIO SUMARISIMO

en trámite ante este Tribunal, se ha dictado la siguiente resolución:

SENTENCIA INTERLOCUTORIA EXPEDIENTE CNT 43226/2024/CA1 SALA IX JUZGADO N° 23 AUTOS: "ASOCIACIÓN BANCARIA Y OTROS c/ESTADO NACIONAL PODER EJECUTIVO MINISTERIO DE SEGURIDAD s/JUICIO SUMARISIMO" Buenos Aires, en la fecha registrada en el SGJ Lex100. VISTOS: Que, llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta alzada para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante contra el pronunciamiento de grado dictado en fecha 26/12/2024, mediante el cual la Sra. Juez a quo rechazó la medida cautelar solicitada y la acción de amparo deducida. Corrido el pertinente traslado de los agravios, la parte actora contesta a tenor del memorial de fecha 7/2/2025. Requerida la opinión de la Fiscalía General ante esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, se expidió a tenor del dictamen de fecha 31/3/2025. Y CONSIDERANDO: I.- Que, en lo sustancial que interesa, cabe señalar que en el marco de la presente acción fundada en los términos de los arts. 47 de la ley 23.551, la Sra. Juez a quo, luego de desestimar la excepción de incompetencia opuesta por el Estado Nacional – Ministerio de Seguridad al momento de haber producido el informe previsto por el art. 4 de la ley 26.854, rechazó in limine la medida cautelar y la acción de amparo interpuesta por las asociaciones sindicales identificadas en el escrito de inicio. Para así decidir, tuvo en cuenta –por un lado– que en estos obrados no existía ninguna lesión actual, grave e inminente que habilitase el curso de la pretensión entablada y –por otro– que tampoco se encontraba configurado un "caso" o "controversia judicial" en los términos del art. 116 de la Constitución Nacional y los parámetros jurisprudenciales provenientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (véase fs. 1663/1689 y 1695/1699; conforme foliatura digital del Sistema de Consulta Web del Poder Judicial de la Nación). Tal decisión ha sido apelada por las reclamantes quienes dirigen sus cuestionamientos –en lo que aquí interesa- a la valoración efectuada en grado respecto de las constancias habidas en la causa, en tanto –según sostienen– los elementos aquí obrantes darían suficiente sostén a lo requerido en la pieza inaugural. En esta dirección, refieren que la configuración de un caso judicial puede variar según la categoría de derecho sustancial que se pretenda hacer valer ante la jurisdicción. Alegan que las resoluciones 893/2024 y 901/2024 dictadas por la cartera ministerial traída al pleito vulneran el ejercicio legítimo y regular de su derecho de huelga garantizado en expresamente en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. En apoyo de su postura, citan la opinión consultiva n° 27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el art. 31 inc. a) de la ley 23.551. Por otra parte, insisten en obtener el dictado de una medida cautelar que suspenda los efectos de las resoluciones mencionadas en el párrafo que antecede hasta tanto se dicte la sentencia definitiva, toda vez que –según dicen– se halla comprometida una afectación actual de la garantía de la libertad sindical que goza de protección constitucional. II.- Que, así planteado el eje de intervención de esta alzada, y en lo que respecta a la admisibilidad liminar de la pretensión entablada, en consonancia con lo señalado en el dictamen por el Sr. Fiscal General (int.), al que corresponde remitirse en razón de brevedad, este Tribunal entiende que asiste razón a las recurrentes. En efecto, cabe señalar que en esta litis, las entidades sindicales demandantes presentaron una demanda encuadrada principalmente en los arts. 43 de la Constitución Nacional y 47 de la ley 23.551 contra el Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Seguridad, solicitando, en concreto, la declaración de invalidez constitucional y la nulidad de las ya aludidas resoluciones 893/2024 y 901/2024, en tanto crearon un

T Sala IX

Fecha de emisión de notificación: 13/junio/2025

Comando Unificado de Seguridad Productiva y un Protocolo de Actuación frente a Bloqueos, respectivamente. Ello, por cuanto, según explican, la terminología del concepto “bloqueo” utilizada por el órgano emisor de las normas objeto de cuestionamiento podría trasuntar una indebida restricción de la garantía del derecho de huelga, en franca contradicción con lo normado por el art. 14 bis de la CN, por el Convenio 87 de la OIT y los instrumentos internacionales de derechos humanos allí mencionados (arg. art. 75 inc. 22 de la CN; véase el escrito de inicio debidamente digitalizado en fs. 3/38). En este marco, este Tribunal no comparte la apreciación de la magistrada de grado anterior en torno a la desestimación de la vía elegida, por cuanto no puede soslayarse la existencia de una norma específica, como la expresamente invocada en el escrito de demanda –es decir, el art. 47 de la ley 23.551– que consagra una vía particular para la tutela de los derechos emergentes de la libertad sindical y destinada a cuestionar todo acto que obstaculice el ejercicio de las potestades que le son atinentes, así como también, consagra la legitimación tanto activa cuanto pasiva. A dichas disposiciones no alcanzan las exigencias formales a las que alude la ley 16.986 y basta que se alegue un impedimento del ejercicio regular de los derechos emergentes de la libertad sindical con un sustento razonable para que prevalezca la disposición especial del mencionado artículo 47 (v. en sentido similar, lo decidido por esta Sala IX, in re, “Ríos Marcos Adrián c/Fate SAICi s/Juicio sumarísimo”, SI 23/9/2024, entre otros). Tampoco puede aseverarse la inexistencia de “caso”, al menos con la intensidad desarrollada en el pronunciamiento en crisis, en la medida en que la presente acción fue iniciada por diversas entidades gremiales que se encuentran cuestionando dos normas que -a su decir- afectarían la actividad comprendida en sus respectivos ámbitos de representación y, por lo tanto, el ejercicio de los derechos colectivos que allí enumeran, sin perjuicio, claro está, de lo que oportunamente se resuelva en orden al fondo de la cuestión planteada. En este marco, se justifica la tramitación de la acción y la apertura de un proceso de cognición, en los términos del art. 47 de la ley 23.551, más allá –se reitera– de lo que podría llegar a resolverse en el momento procesal oportuno; razón por la cual corresponde revocar la resolución recurrida en cuanto desestima la acción con carácter liminar y ordenar su tramitación en los términos del art. 498 del CPCCN, sin que de este parecer pueda extraerse conclusión alguna relacionada con la suerte final de la pretensión. III.- Que, finalmente, en lo que atañe a la medida cautelar cuyo dictado solicitan a esta alzada, atendiendo lo expresamente señalado en el dictamen a su respecto, corresponde devolver las actuaciones a la instancia de grado para que evalúe la configuración –o no– de las exigencias a las que alude el ordenamiento adjetivo respecto de la medida cautelar solicitada, en resguardo del derecho de defensa en juicio y la garantía de doble instancia (art. 198 del CPCCN y doctrina de Fallos: 318:1711). IV.- Que, en atención a la naturaleza de la cuestión debatida y sin perjuicio de la solución a la que se arriba, las costas serán soportadas por su orden (art. 68 del CPCCN). Por todo lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el Sr. Fiscal General (int.) ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el Tribunal RESUELVE: 1) Revocar el pronunciamiento de grado en cuanto desestima la acción intentada. 2) Devolver las actuaciones a la instancia de grado para que analice la viabilidad de la medida cautelar solicitada. 3) Imponer las costas de alzada por su orden. Cópiese, regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase. Alvaro E. Balestrini Mario S. Fera Juez de Cámara Juez de Cámara Ante mí.- -vc-

Queda Ud. legalmente notificado

Buenos Aires, de junio de 2025. NA

Fdo.: GUILLERMO FABIAN MORENO, SECRETARIO DE CAMARA